

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022).

RADICADO:	761113333003 <b>20210005801</b>
DEMANDANTE:	ULDARICO RODRÍGUEZ MORENO <a href="mailto:uldaricoRodriguezm@hotmail.com">uldaricoRodriguezm@hotmail.com</a>
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA <a href="mailto:notificaciones@buga.gov.co">notificaciones@buga.gov.co</a>
TEMA:	AUTO QUE RECHAZA POR IMPROCEDENTE LA APELACIÓN PROPUESTA CONTRA LA PROVIDENCIA QUE RECHAZÓ UN INCIDENTE DE NULIDAD
DECISIÓN:	CONFIRMA AUTO DE PRIMERA INSTANCIA Y <b>EXHORTA</b>

MAGISTRADO PONENTE: GUILLERMO POVEDA PERDOMO

Auto de interlocutorio No. **121**

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO  
(Resuelve apelación)

Se procederá a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte pasiva, que actúa a través de apoderado judicial, contra el Auto No. 478 del 6 de julio de 2022 que rechazó de plano un incidente de nulidad en el proceso de la referencia, una vez hechas las siguientes consideraciones.

I. ANTECEDENTES

El señor Alirio Leyes Díaz como apoderado del señor Uldarico Rodríguez Moreno instauró demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997, para lograr el cumplimiento de la Ley 1955 de 2019<sup>1</sup> artículo 263 parágrafo 2.<sup>º</sup>, en armonía con el Decreto 498 de

<sup>1</sup> <<Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".>>  
<sup>2</sup> <<ARTÍCULO 263. REDUCCIÓN DE LA PROVISIONALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.  
(...)

**PARÁGRAFO 2º.** Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional.

Surtido lo anterior los empleos deberán proveerse siguiendo el procedimiento señalado en la Ley [209](#) de 2004 y en los decretos reglamentarios. Para el efecto, las listas de elegibles que se conformen en aplicación del presente artículo tendrán una vigencia de tres (3) años.

El jefe del organismo deberá reportar a la CNSC, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, los empleos que se encuentren en la situación antes señalada.

Para los demás servidores en condiciones especiales, madres, padres cabeza de familia y en situación de discapacidad que vayan a ser desvinculados como consecuencia de aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados, lo anterior sin perjuicio del derecho preferencial de la persona que está en la lista de ser nombrado en el respectivo empleo.>>

2020<sup>3</sup> artículo 1 parágrafo 3.<sup>º</sup><sup>4</sup> expedido en el marco del fortalecimiento del dialogo social entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales para la protección de empleados que se encuentran en situación de especial protección constitucional.

Son pretensiones de la demanda que se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 1.º de la Constitución Política, en tanto se ordene efectivamente la aplicación del parágrafo 2.º del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019 y el parágrafo 3.º del Decreto 498 de 2020.

Como hechos constitutivos del incumplimiento se indicaron los siguientes:

- Mediante Decreto No. 2273 del 27 de junio de 1997, el señor Uldarico Rodríguez Moreno fue nombrado en provisionalidad como funcionario de la Secretaría Departamental de Educación del Valle del Cauca, en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 5335, Grado 03, en la U.D. Manuel Antonio Sanclemente del Municipio de Guadalajara de Buga, en el que se posesionó el 10 de julio de 1997 según Acta No. 6380.
- Como consecuencia de la homologación y nivelación de personal administrativo del sector educación en ese municipio, el 20 de diciembre de 2010 tomó nuevamente posesión en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 01, de la Institución Educativa Manuel Antonio Sanclemente de Guadalajara de Buga, según lo ordenado en las resoluciones DAM No. 1697 y 1704 del 30 de noviembre de 2010 y No. 1734 del 3 de diciembre de 2010, con efectividad al 20 de diciembre de 2010, fecha desde la cual ha prestado sus servicios en forma cumplida y continua.
- La Resolución CNSC 202023320016335 del 17 de enero de 2020 conformó la lista de elegibles para proveer 30 vacantes definitivas en el empleo denominado Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 01.
- El 28 de febrero de 2020, el señor Rodríguez Moreno fue notificado de la Resolución SEM-1900-100 del 3 de febrero de 2020 expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Guadalajara de Buga, en cumplimiento de la anterior resolución de la CNSC, por la cual fue nombrado el señor Jesús David Bustamante Suárez en periodo de prueba

<sup>3</sup> <<Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública>>

<sup>4</sup> <<**ARTÍCULO 1.** Modificar el artículo [2.2.5.3.2](#) del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el cual quedará así:

**"ARTÍCULO 2.2.5.3.2. Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera.** La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

(...)

**PARÁGRAFO 3.** Cuando la lista de elegibles esté conformada por un número igual o superior al número de empleos a proveer, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que en lo posible los servidores que se encuentren en las condiciones señaladas en el parágrafo anterior sean reubicados en otros empleos de carrera o temporales que se encuentren vacantes, y para los cuales cumplan requisitos, en la respectiva entidad o en entidades que integran el sector administrativo.>>

en el cargo de servicios generales Código 470, Grado 01 y, como consecuencia de ese nombramiento, declarado insubsistente el actor.

- El actor es una persona con discapacidad, de nacimiento padece una <<agenecis de mano izquierda y tercio medio del antebrazo izquierdo, presión ausente>>.
- Al ofertar los cargos ante la CNSC para proveer los empleos en vacancia, el Municipio de Guadalajara de Buga omitió realizar previamente un estudio sociodemográfico que determinara los funcionarios dentro del retén social (pre pensionados), mujeres cabeza de hogar y discapacitados, a fin de dar cumplimiento en forma retrospectiva, integral y finalista, al inciso final del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019, esto es, adelantar acciones afirmativas para que en lo posible se les reubicara en otros empleos vacantes o fueran los últimos en ser retirados, garantizando su estabilidad laboral relativa y el respeto a su dignidad humana por ser funcionarios en condición de vulnerabilidad, como parte de un programa que mitigara el impacto socioeconómico de quienes estuvieran en esa situación.
- La actual situación económica del país originado en la pandemia y, la condición especial de persona discapacitada del actor le impedirá conseguir un nuevo empleo, lo que lo deja desprotegido junto a su núcleo familiar, al no suplir sus necesidades de subsistencia.
- Previo a la declaración de insubsistencia en el cargo, el 5 de febrero de 2020 el actor radicó una solicitud al Secretario de Desarrollo Institucional del Municipio de Guadalajara de Buga para que se protegiera su vulnerabilidad como persona discapacitada a raíz de la <<agenecis de mano izquierda y tercio medio del antebrazo izquierdo, presión ausente>>, y garantizara sus condiciones de vida digna y las de su familia, a su cargo, al ser retirado estimó que se vulneraría sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital.
- La anterior solicitud no fue contestada.
- El 18 de febrero de 2021, el actor solicitó al Alcalde de Guadalajara de Buga, que lo designara en provisionalidad en uno de los cargos de Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01, que la Secretaría de Educación del municipio de Guadalajara de Buga Valle del Cauca había nombrado en provisionalidad a los señores Fredy Escobar Berrio, Luz Estela Quesada Grajales, Miguel Andrés Moncada Álvarez, Gerardo Wilmer Villafañe, Julián Alexander Téllez, nombramientos que fueron realizados en el periodo comprendido entre marzo a octubre de 2020 o, en su defecto en alguno de los cargos dejados por estos dentro de la planta de personal de dicha secretaría, en cumplimiento del inciso final del artículo 263 de la Ley 1955 de 2019.
- En respuesta, el alcalde municipal manifestó que los cargos enunciados le pertenecen a los titulares de los mismos, no están vacantes en forma definitiva, siendo inviable acceder a lo pedido, sin embargo, en respuesta anterior a una petición de otro funcionario desvinculado manifestó que

eran nombramientos en provisionalidad, negándose a expedir copia de dichos nombramientos.

**Con Auto No. 188 del 1 de junio de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga** rechazó por improcedente la demanda, con sustentó en el artículo 9 inciso 2.º de la Ley 397 de 1997, al estimar que el actor contaba con otro instrumento judicial para lograr lo pretendido, esto es, impedir que la decisión de la administración (Resolución SEM 1900-0100 del 3 de febrero de 2020) surta efectos, lo que hubiera logrado haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de la oportunidad procesal de ley. También estimó que, las comunicaciones enviadas a la alcaldía municipal no eran prueba de la renuencia, en cuanto la Ley 1955 de 2019 entró en vigor el 25 de mayo de esa anualidad y, el concurso de méritos ya había pasado, siendo la norma inaplicable para la época de la convocatoria del concurso de méritos.

**Con Auto No. 333 del 16 de julio de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga** resolvió proceder con el archivo de las actuaciones, ejecutoriada la providencia que rechazó la demanda.

**Mediante Sentencia de tutela del 16 de julio de 2021 dictada en el proceso identificado con radicación 76001233300020210066200, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca** amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por el señor Uldarico Rodríguez Moreno, dejó sin efectos el auto interlocutorio No. 188 de junio 1 de 2021, emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga y le ordenó dictar auto de reemplazo en donde admita la demanda en la acción de cumplimiento, dentro del proceso radicado No. 76111-33-33-003-2021-00058-00.

En síntesis, el tribunal consideró que el análisis de la existencia de otro medio judicial de defensa se debe analizar al momento de abordar el fondo del asunto y, la constitución en renuencia como requisito previo sí fue acreditada con los oficios del 5 de febrero de 2020 y 18 de enero de 2021, en especial éste último, al igual que el silencio de la administración, pues no contestó dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud.

**Con Auto No. 338 del 21 de julio de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga** admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad demandada y al Ministerio Público.

**Con Auto No. 438 del 12 de agosto de 2021, el juzgado** requirió a la Alcaldía Municipal de Buga para que informara si las personas designadas como Auxiliares de Servicios Generales, Grado 01, superaron el período de prueba para el que fueron designadas mediante la Resolución SEM 1900-0100 del 3 de febrero de 2020 y, siguen vinculadas con la administración municipal.

**Mediante la Sentencia No. 73 del 28 de junio de 2022**, el juzgado negó por improcedente el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley impetrada y no condenó en costas.

Como lo relevante al presente asunto no son las consideraciones en que la juez A-quo sustentó la decisión, pues ello será materia de la apelación de la sentencia, de llegarse a proponer, no se mencionarán, sí es pertinente indicar que en la decisión se advierte que, la admisión se notificó a la entidad demandada y al Ministerio Público por correo electrónico del 22 de julio de 2021, pero el ente territorial no emitió ningún pronunciamiento, pese a que -según se afirma- estaba debidamente notificado.

El ente territorial con Oficio fechado 13 de agosto de 2021<sup>5</sup>, sí atendió una prueba de oficio decretada por la juez A-quo.

El 5 de julio de 2022, el abogado Ervin Tovar Pineda como apoderado del Municipio de Guadalajara, formuló nulidad contra la anterior sentencia y hasta el auto admisorio, para que éste último fuera notificado en debida conforme según el artículo 13 de la Ley 393 de 1997 y se le reconociera personería conforme al memorial poder conferido por el Alcalde de Guadalajara de Buga.

Para soportar lo pedido indicó que lo recibido el 22 de julio de 2021, por la entidad, fue una notificación por estado, por lo que, no se cumplió con la notificación personal establecida en el artículo 13 de la Ley 393 de 1997, lo que vulneró el derecho a la defensa y contradicción y hace procedente la declaratoria de nulidad según el artículo 133 numeral 8<sup>6</sup> y 134 inciso 1.º del CGP.

Precisó que, el Municipio de Guadalajara de Buga solo advirtió la nulidad desde el conocimiento de la sentencia, <<notificada personalmente el día 29 de junio de 2022>>, por lo que no le era exigible tomar las previsiones que debía realizar.

**Con Auto No. 478 del 6 de julio de 2022, el juzgado** rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por el abogado Ervin Tobar Pineda, con fundamento en el artículo 135 del CGP, sustentado en que el abogado olvidó anexar el memorial poder presuntamente a él conferido para actuar y, las personas que comparecen al proceso deben hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado

---

<sup>5</sup> Suscrito por el secretario de educación municipal de Buga, donde informa que efectivamente las personas designadas como auxiliares de servicios generales grado 1, mediante resolución SEM 1900-0100 del 3 de febrero de 2020, superaron el periodo de prueba para el que fueron designadas y siguen vinculadas con la administración.

<sup>6</sup> << **ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD.** El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.>>

conforme los artículos 160 del CPACA y 73 del CGP, por lo que carece de legitimación para proponer la nulidad. También argumentó lo siguiente:

<<En igual sentido, indica la norma que los incidentes propuestos se rechazaran de plano cuando se promuevan por fuera de término, es decir, a luces del artículo 134, antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella, y en este asunto, el memorial de incidente fue propuesto el día 5 de julio de 2022, es decir, con posterioridad a la emisión de la sentencia – 28 de junio de 2022, siendo entonces solo procedente si la causal se genera en esta decisión, que no es el caso, puesto que se ataca en esta etapa la notificación del auto admisorio; aunado a que, tal como lo indica el inciso segundo del artículo 135 adjetivo civil, no puede alegar la nulidad quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

En ese sentido, no se puede obviar, como pretende el togado, que si bien al momento de notificarse la demanda esta se hizo por estado del 22 de julio de 2021, remitiéndole únicamente a la parte demandada a su correo electrónico el auto de admisión y obviando adjuntar el libelo y los anexos, como lo establecen los artículos 13 de la Ley 393 de 1997 y 199 del CPACA, también es cierto que el ente territorial tuvo conocimiento del trámite y actuó con posterioridad en el proceso durante la etapa probatoria, resumida en la respuesta a un requerimiento efectuado por este despacho de fecha 13 de agosto de 2021, donde se indica precisamente el número del radicado, los sujetos procesales y el medio de control de acción de cumplimiento, remitida al proceso por la Dirección Jurídica desde su correo [dirjuridica@guadalajaradebuga-valle.gov.co](mailto:dirjuridica@guadalajaradebuga-valle.gov.co) y firmado por el Secretario de Educación Municipal, lo que sin lugar a equívocos se reduce en el conocimiento que tenía el ente territorial de la acción impetrada en su contra y la falta de diligencia al momento de proponer oportunamente el incidente de nulidad que ahora se invoca, dando lugar a la configuración del saneamiento como lo dispone el numeral 1º del artículo 136 del compendio procesal.>>

El 14 de julio de 2022, el abogado Ervin Tovar Pineda como apoderado del Municipio de Guadalajara, formuló recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra el Auto 478 del 6 de julio de 2022, para que se reponga el auto y se estudie la nulidad formulada inicialmente y, en su defecto, se conceda la apelación contra la providencia. También pidió que se le reconociera personería.

En lo relacionado con la supuesta falta de poder para actuar, precisó que se trataba de una apreciación errónea del despacho pues, el 5 de julio de 2022 se le otorgó poder mediante mensaje de datos que fue enviado al correo institucional del despacho por parte del Alcalde de Guadalajara de Buga.

Referente a la configuración de una notificación por conducta concluyente planteada por el despacho, indicó que el correo institucional para notificaciones judiciales del municipio es [notificaciones@buga.gov.co](mailto:notificaciones@buga.gov.co) y no el correo [dirjuridica@guadalajaradebuga-valle.gov.co](mailto:dirjuridica@guadalajaradebuga-valle.gov.co) y, tal como lo expone el despacho en el auto, no realizó la notificación personal en los términos del artículo 13 de la



Ley 393 de 1997, <<es decir indicar a través de correo electrónico al buzón electrónico dispuesto por la entidad pública, que se trata de la notificación personal, y anexando el líbello y anexos de la misma.>> lo que conlleva a la no participación del ente público en el proceso y acarrea la vulneración al debido proceso, contradicción y defensa que se debe a todos los sujetos procesales dentro de una actuación judicial.

**Con Auto No. 537 del 28 de julio de 2022, el juzgado** repuso parcialmente la providencia interlocutoria No. 478 de fecha 6 de julio de 2022, en el sentido de reconocer personería al abogado Ervin Tovar Pineda, para que actúe como apoderado judicial del Municipio de Guadalajara de Buga, confirmó en lo demás la decisión recurrida y, concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del municipio de Guadalajara de Buga, en el efecto devolutivo, contra la providencia que rechazó de plano el incidente de nulidad incoado.

En cuanto al reconocimiento de personería, el despacho verificó que en efecto se había allegado el poder junto con los documentos anexos al escrito de incidente de nulidad, lo que no había advertido previamente ya que el escrito no se presentó como un documento adjunto, sino que venía inmerso en el cuerpo del mensaje, documento que se ajustaba a los artículos 75 y ss del C.G.P.

Respecto a la indebida notificación de la demanda dio el siguiente argumento:

<<(…) si bien como se dijo, la notificación de la demanda de cumplimiento se efectuó por estados del 22 de julio de 2021, y no de forma personal, no es menos cierto que el municipio de Guadalajara de Buga con posterioridad, a través precisamente de la Dirección Jurídica, conoció del proceso que se estaba adelantando en su contra, y actuó durante la etapa probatoria, al dar respuesta a un requerimiento efectuado por este Despacho mediante oficio de fecha 13 de agosto de 2021, donde refiere el número del radicado, los sujetos procesales y el medio de control de acción de cumplimiento. Contestación que fue remitida desde el correo electrónico [dirjuridica@guadalaradebuga-valle.gov.co](mailto:dirjuridica@guadalaradebuga-valle.gov.co) y firmado por el Secretario de Educación Municipal.

En ese orden, es clara la norma tipificada en el artículo 135 del C. G. del P., al expresar que no podrá alegar la nulidad quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

En igual sentido, el numeral 1º artículo 136 ibidem, indica que la nulidad se considerará saneada cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla, como efectivamente acaeció en esta oportunidad con la parte demandada cuando aportó prueba pedida por el despacho, identificando plenamente este asunto, lo que devino en el saneamiento de la nulidad.>>

## II. CONSIDERACIONES

El artículo 87 de la Constitución Política prevé la acción de cumplimiento como un mecanismo por medio del cual, cualquier ciudadano puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.

La Ley 393 de 1997 reguló el artículo 87 constitucional y, en materia de recursos, estableció en el artículo 16 como regla general, la improcedencia de los mismos contra las providencias dictadas en el marco de tal trámite, con excepción de la sentencia y el auto que deniegue la práctica de pruebas<sup>7</sup>.

Al estudiar la exequibilidad del referido artículo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-319 de 2013, consideró que la exclusión de recursos contra las decisiones de trámite en la acción de cumplimiento, salvo la sentencia y el auto que deniega pruebas, es compatible con los derechos de contradicción y defensa, así como con el derecho de acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, la limitación impuesta por el legislador es razonable y atiende al propósito del medio de defensa judicial, de carácter residual. Tal pronunciamiento, consignó sobre la norma acusada lo siguiente:

<<Este es un precepto de carácter general en su sentido y específico para el trámite de la acción de cumplimiento, por lo que debe ser interpretado en el sentido que excluye, entre otros recursos, la apelación contra el auto de rechazo de la demanda. Por ende, no concurre vacío normativo. [...]>>

Lo anterior, fue abordado por la Corte Constitucional en consideración a que los demandantes de la acción de constitucionalidad planteaban la presunta existencia de un vacío normativo en la Ley 393 de 1997.

Sobre el particular, el Consejo de Estado en providencia de 7 de abril de 2016<sup>8</sup>, al analizar la procedencia de la apelación interpuesta por la parte actora contra un auto que rechazó de plano la acción de cumplimiento, identificó las reglas fijadas por la Corte Constitucional en sentencia C-319 de 2013 y, se refirió expresamente a la remisión normativa al CPACA, efectuada por el A-quo para conceder la apelación en dicha oportunidad, al señalar:

<<Fue precisamente bajo este contexto que la Corte analizó la constitucionalidad de la norma y definió como reglas que fundaron su decisión de declarar la exequibilidad del aparte demandado, las siguientes:

1. La Constitución Política no prevé una regla particular que prescriba un determinado recurso dentro del trámite de la acción de cumplimiento.

---

<sup>7</sup> <<**ARTICULO 16. RECURSOS.** Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente.>>

<sup>8</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera Ponente: Rocio Araujo Oñate. Bogotá, D.C. 7 de abril de 2016. Radicación N°25000-23-41-000-2015-02429-01 (ACU).



2. La medida legislativa de limitar la procedencia de los recursos en el trámite de la acción de cumplimiento está dirigido unívocamente a dotar de celeridad el proceso, lo que constituye un fin constitucionalmente legítimo.

3. El artículo 16 de la Ley 393 de 1997 es norma expresa y específica para el trámite de la acción de cumplimiento, por lo que debe interpretarse en el sentido de que excluye, entre otros recursos, la apelación contra el auto de rechazo de la demanda.  
(...)

Esta regla que adquirió fuerza vinculante desde la notificación de esta sentencia<sup>9</sup>, supone que **en adelante los operadores jurídicos y las demás autoridades del Estado y ciudadanos deben observar y aplicar esta ratio decidendi, regla que señaló que es improcedente el recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda de la acción de cumplimiento y que tal posibilidad ha de quedar restringida al fallo que resuelva dicha acción y al auto que deniegue la práctica de pruebas.**

Tal conclusión responde a los problemas jurídicos de procedencia del recurso de apelación y aplicación preferente de la sentencia C-319 de 2013 **y, descarta la posibilidad de conceder el recurso de apelación contra las providencias que rechazan la acción de cumplimiento, en aplicación de la remisión normativa que, para este caso, se sirvió del artículo 243 del CPACA, a efectos de sustentar su viabilidad.** Se reitera que la Corte Constitucional determinó que el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 es norma expresa y especial sobre la materia, lo que impide dicha remisión al artículo en cita.>> (Negrilla fuera del texto original).

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que la concesión del recurso en el caso concreto desconoce la sentencia C-319 de 2013, en tanto se sustentó en la aplicación de la Ley 1437 de 2011 modificada por el Decreto 2080 de 2021, pese a que la Ley 393 de 1997 artículo 16 es norma **específica y expresa** para el trámite de los recursos en la acción de cumplimiento, lo que implica que no existe vacío normativo a efectos de alegar una remisión normativa, se rechazará el recurso interpuesto de conformidad con la interpretación constitucional, vinculante para todos los operadores jurídicos.

En este punto, debe llamarse la atención sobre la trascendente labor judicial que representa el análisis de la concesión de los recursos a partir del estudio de su procedencia, en la medida que constituye una función propia del juez ante el que se proponen y contribuye a la eficiencia de la administración de justicia, al destinar los recursos humanos, de tiempo, técnicos, entre otros, buscando el mayor provecho posible, amén de disminuir la congestión judicial que aumenta por las crecientes cargas de trabajo, luego, es un compromiso que cada operador judicial efectúe un análisis riguroso que impacte positivamente en la crisis en la que está inmersa la administración de justicia.

La falta de legitimación para reclamar el apoderado, en nombre de la entidad territorial, es manifiesta, porque **la Sentencia del 28 de junio de 2022** es desestimatoria de las pretensiones, el juzgado negó por improcedente el medio de control de cumplimiento de normas, así las cosas, no existe un interés, un derecho

---

<sup>9</sup> La desfijación del edicto de la sentencia C-319-2013 se cumplió el 29 de julio de 2013, según se aprecia en el link de consulta de procesos de la Corte Constitucional. Expediente D-9341.  
<http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/ConsultaC/proceso.php>

afectado de la localidad, requisito del artículo 134 del CGP que conduce a la inutilidad de lo pedido en esta ocasión.

En consecuencia,

### **RESUELVE:**

**1.º RECHAZAR** por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Municipio de Guadalajara de Buga contra el Auto No. 478 del 6 de julio de 2022 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga, conforme lo indicado en la parte motiva de este proveído.

**2.º NOTIFICAR** esta decisión a las partes, en los términos del artículo 14 de la Ley 393 de 1997.

**3.º DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen, una vez se encuentre en firme la presente providencia.

Providencia suscrita electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde puede se puede corroborar su autenticidad.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

(firma electrónica)  
**GUILLERMO POVEDA PERDOMO**  
**Magistrado**